

MAYTE MARTÍN SERRA

Reinserción de refugiados y desplazados en Burundi

Desde su independencia de Bélgica, en 1964, Burundi vive en una gran inestabilidad socioeconómica que ha provocado el exilio de cientos de miles de burundeses a los países limítrofes, principalmente a Tanzania. Los dos puntos culminantes del exilio fueron 1972 y 1993. Solamente en 1993, tras el asesinato de Melchior Ndadaye, el primer presidente elegido democráticamente, cerca del 9% de la población de Burundi huyó a Tanzania y el 12% de la población total se asentó en campos de desplazados. La situación de los refugiados y desplazados en Burundi es ejemplo tanto de la problemática en la aplicación de la ayuda internacional específica a este grupo de población como de las dificultades políticas, sociales y económicas de Estados frágiles, causas potenciales de conflicto.

Mayte Martín Serra fue coordinadora regional de la ONG de ayuda humanitaria Solidarités en Burundi entre 2003 y 2004. Trabajó principalmente con refugiados y desplazados

El 28 de agosto de 2000 se firmaron los Acuerdos de Arusha para la paz y la reconciliación de Burundi. El Protocolo IV de dicho acuerdo preveía los principios que deberían determinar el regreso y la reinserción de los llamados "siniestrados", término que comprende los desplazados internos, los reagrupados forzosamente en campos de acantonamiento, los dispersados en casas de familiares o conocidos y los repatriados. Dicho protocolo dedica el artículo 3º a la creación y puesta en marcha de una estructura independiente del Gobierno llamada Comisión Nacional de Rehabilitación de Siniestrados (CNRS). Esta comisión tiene como misión velar por la seguridad de los refugiados y desplazados una vez llegados a sus colinas de origen, denunciar y perseguir judicialmente a los presuntos culpables y compensar material y moralmente a las personas perjudicadas por el conflicto.

El clima político de Burundi ha cambiado radicalmente en el último año desde los acuerdos de alto el fuego firmados el 16 de noviembre de 2003 entre el Gobierno y el principal grupo rebelde, *Conseil National pour la Défense de la Démocratie*

Forces de la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), dirigido por Pierre Nkurunziza. Tras largas negociaciones, Nkurunziza obtuvo el cargo de ministro del Buen Gobierno, que le convierte en el número tres del Ejecutivo, y otros miembros del CNDD-FDD ocupan desde entonces la vicepresidencia y la secretaría general adjunta de la Asamblea Nacional, así como la presidencia de tres gobiernos regionales y una generosa cuota dentro de los efectivos del ejército y de la policía.

A pesar del fin de las hostilidades entre el ejército y el CNDD-FDD, la paz en Burundi es aún extremadamente frágil debido a varios factores: el grupo rebelde *Forces Nationales de Libération* (FNL) de Agathon Rwaso, aunque lanzó algunas tentativas de diálogo el pasado mes de enero, sigue excluido del proceso de paz y del gobierno de transición; un gran número de antiguos combatientes del CNDD empiezan a impacientarse al no ver la recompensa esperada por el abandono de las armas (ya que no todos podrán ser incorporados al ejército); el regreso de los refugiados y los desplazados internos a sus comunidades de origen, relativamente forzado por parte de las autoridades burundesas, sin antes haber resuelto numerosos problemas ligados a dicho regreso (como el problema de la propiedad de la tierra), puede provocar una fuerte desestabilización de la sociedad que haga estallar de nuevo el conflicto.

La comunidad internacional organizó a principios de 2004 mesas redondas en Bruselas en las que los países donantes cifraron la cuantía de la ayuda en mil millones de dólares, que se pensaban destinar a la rehabilitación del país para la reinserción de refugiados y desplazados internos.¹

Oficialmente había 320.000 burundeses en campos de refugiados en Tanzania; unos 470.000 refugiados en las zonas fronterizas, fuera de los campos y en situación irregular; y 300.000 desplazados internos asentados en 230 campos de desplazados. El año pasado se registró el regreso, asistido por ACNUR, de 29.153 refugiados, y la vuelta espontánea de otros 44.300, pero no se tienen datos del principal grupo de refugiados, aquellos que no constan en las listas de ACNUR y que son los primeros en volver y los más vulnerables.²

¹ Información obtenida por el director de operaciones de emergencia de UNICEF en Burundi durante una reunión en la sede de OCHA en Bujumbura, el pasado mes de enero.

² Estos datos proceden de las estadísticas de ACNUR Burundi. Dichas estadísticas no coinciden a un lado y a otro de la frontera. Es más, estas cifras estaban tan infladas, que ACNUR se percató en junio de que no podría consumir toda la financiación recibida de la Comisión Europea. Se decidió entonces hacer regresar a Burundi diez expatriados para gestionar el campo de refugiados tutsis congolese de Gatumba, que contaba con apenas 3.000 personas. ACNUR no desplazó este campo de refugiados hacia el interior de Burundi (como muchas ONG le habían recomendado) y el campo permaneció a 4 km de la frontera congolese y a 5 km de la base de los cascos azules de la ONU. El pasado 13 de agosto, las milicias de los Mai Mai, ayudadas por el FLN, atacaron el campo y mataron 160 personas, principalmente mujeres y niños. La matanza comenzó a las 22.00 horas y duró una hora y media. Los cascos azules no intervinieron hasta el día siguiente, en que distribuyeron palas para cavar las fosas comunes. A raíz de la masacre, el equipo de expatriados de ACNUR desplazó el campo de refugiados 800 metros más hacia el interior.

La situación de los refugiados burundeses en Tanzania

Según algunos informes oficiales del Gobierno burundés, de ACNUR y de Human Rights Watch, las razones que mueven a los refugiados a volver a Burundi, y que incluso podrían provocar un regreso masivo, son las presiones que las autoridades tanzanas ejercen sobre los refugiados, que parecen haber deteriorado considerablemente las condiciones de vida en los campos, y las reducciones de la ayuda alimentaria ofrecida por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En febrero, según lo observado en la misión de evaluación organizada por UNICEF a los campos de refugiados en Tanzania, se desmintieron muchas de las supuestas razones del regreso.

Las raciones de ayuda alimentaria que el PMA distribuía en los campos de refugiados disminuyeron un 50% a principios de 2003, pero se reestablecieron en mayo de 2004 al 70% de la ración inicial. Estas raciones no son el único aporte alimentario de los refugiados, ya que muchos de ellos cuentan con parcelas de tierra cultivable, de las que obtienen un complemento a la ayuda alimentaria recibida.

En muchos campos se ha impuesto un toque de queda a partir de las 18 horas y los refugiados tienen prohibido el abandono de los campos para ir a cultivar las tierras de los granjeros de los alrededores, para ir al mercado o incluso al hospital más cercano en caso de urgencia médica. Aquellos que violan el toque de queda, son detenidos y enviados a prisión. El 25% de los efectivos de la cárcel del distrito de Kasulu, por ejemplo, son refugiados burundeses. Sin embargo, la presencia policial y el control en los campos es bastante reducido: apenas 20 policías para 17.000 refugiados.

Los tres campos de refugiados visitados, Mtabila I, Mtabila II y Muyovosi (que según ACNUR son representativos de la realidad del resto de los campos), presentaban condiciones de vida muy superiores a la media en Burundi. Las instalaciones son modernas y están en perfecto estado. Las casas disponen de agua y electricidad. La totalidad de niños asisten a la escuela diariamente y cuentan con una media de un profesor por cada 45 alumnos (mientras que en algunas comunidades de Burundi, la media es de un profesor por cada cien alumnos). Existen escuelas de enseñanza secundaria y de formación profesional. En Mtabila I disponen incluso de un cibercafé alimentado por paneles solares. La enseñanza, los servicios sanitarios y los medicamentos son gratuitos. El nivel de educación, de salud y el estado nutricional son mucho más elevados que en Burundi. De ahí que expresaran en un principio muy poco interés por volver a su país.

Con las progresivas limitaciones de libertad, los refugiados han tomado conciencia de que no pueden permanecer prisioneros en los campos y por esa razón, a pesar de las comodidades de las que disfrutaban en ellos, han emprendido el camino de regreso.

Pero existe una gran incertidumbre ante lo que van encontrarse al volver a sus casas. La CNRS no ha puesto todavía en marcha ninguna de las acciones para las que fue creada y los refugiados encuentran sus tierras ocupadas por quienes les agredieron y forzaron al exilio. Este es el caso sobre todo de los refugiados de

*En muchos
campos se ha
impuesto un
toque de
queda a
partir de las
18 horas.
Aquellos que
lo violan son
detenidos y
enviados a
prisión*

1972, originarios principalmente de las tierras fértiles de la orilla del lago Tangani-ka y de la llanura del Imbo, en las regiones de Bururi, Makamba y Bujumbura Rural. Muchos de ellos fueron expropiados por sus agresores e incluso por el Gobierno, que aprovechó la huida de los propietarios para ceder dichas tierras a altos funcionarios y a empresas estatales.

Esta no es la única traba del regreso: el Gobierno de Tanzania impide a los refugiados salir del país con sus bienes o venderlos. Como declaró el pasado mes de diciembre: “Entraron [los refugiados burundeses] con las manos vacías y saldrán con las manos vacías”.³

ACNUR ha elaborado un plan de regreso asistido o facilitado en el cual ofrece a cada familia un “paquete de regreso” que contiene una ayuda alimentaria para sobrevivir durante tres meses, semillas y utensilios mínimos de cocina y herramientas agrícolas. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que, en el calendario agrícola de Burundi, de junio a enero no hay ninguna cosecha y que los llegados en esa época deben sobrevivir durante más de cinco o seis meses con los víveres de un paquete de regreso previsto para tres. Las consecuencias no se han hecho esperar y ya se están dando los primeros casos de refugiados que llegaron en perfecto estado nutricional al país y que cayeron en la malnutrición una vez agotado su paquete de regreso.

Es aún más grave el caso de los inmigrantes ilegales burundeses en Tanzania (aquellos que viven fuera de los campos, habitualmente cerca de la frontera, sin ningún tipo de documentación oficial) y los denominados por ACNUR “refugiados ilegales” (aquellos que viven en los campos de refugiados sin estar inscritos). Estos dos grupos, por no estar inscritos en las listas de ACNUR, no han recibido ningún tipo de asistencia en todo su periodo de exilio y son, sin ninguna duda, mucho más vulnerables que los anteriores. El Gobierno de Tanzania no les ha concedido el permiso de residencia ni la nacionalidad tanzana y ha declarado no tener ninguna intención de hacerlo. Cuando llegan a Burundi, muchos de ellos carecen incluso de documentos de identidad o de cualquier otro papel que les identifique como exiliados, por lo que ACNUR no se hace cargo de ellos. UNICEF y el PMA, sin embargo, han decidido prestar especial atención a este grupo, que además es el más numeroso.

Los desplazados

Los desplazados internos y los reagrupados en campos de cantonamiento son los más vulnerables de todos los siniestrados ya que, durante todos estos años de conflicto, ni las agencias humanitarias ni las ONG han podido acceder a ellos por problemas de inseguridad. Además, la comunidad internacional ha volcado su ayuda en los refugiados y ha dejado relativamente de lado los problemas, muy similares —necesidad de rehabilitar sus casas y preparar las tierras que llevan años sin ser explotadas—, a los que se enfrentan los desplazados, los que no

³ Declaración emitida en la emisora de radio independiente *Jjambo FM*, diciembre de 2003.

reciben ningún paquete de ayuda. Este trato diferencial ha provocado enfrentamientos entre ambos grupos.

Las causas del desplazamiento han sido muy diversas así como la naturaleza de los campos de desplazados:

- Campos dormitorio: algunas zonas, durante la noche, eran escenarios habituales de combate entre el ejército regular y el rebelde o víctimas de pillajes y vandalismo, lo cual obligaba a sus habitantes (los llamados “dispersos nocturnos”) a refugiarse en casas de familiares y amigos o a reunirse en asentamientos durante la noche, también llamados campos dormitorio. Habitualmente se trataba de la ocupación nocturna de edificios públicos como centros de salud, escuelas, iglesias, entre otros.
- Campos de desplazados: algunas familias, debido a las agresiones, los pillajes y la inseguridad general de vivir aisladas en las colinas, decidieron reagruparse en pequeños asentamientos para protegerse mutuamente o para que uno de los dos ejércitos les protegiera del otro.
- Campos de cantonamiento: en varias ocasiones, el ejército, apoyado por la Administración, creó campos de concentración de ciudadanos, principalmente hutu, a los que se les creía colaboracionistas del ejército rebelde, para ejercer un mayor control sobre ellos so pretexto de protegerlos.
- Campos de indigentes: cerca de los centros de nutrición suplementaria hay todavía algunos asentamientos de indigentes. Se trata principalmente de campesinos *batwa* (una minoría étnica de Burundi que representa el 1% de la población) que huyen más de la miseria que de la inseguridad, y se agrupan con la intención de crear pequeñas economías de escala y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Estos desplazados por la miseria no han sido nunca contabilizados como siniestrados y apenas han recibido ayuda humanitaria.

Una vez firmados los acuerdos de paz, y tras el cese de las hostilidades, algunos campos de desplazados se están desmantelando (el 65%), mientras que otros se están convirtiendo en campos permanentes o campos-aldeas (35%).

Los campos permanentes instalados sobre tierras pertenecientes al Estado no suponen ningún problema. Sin embargo, el 12% de los campos de desplazados están erigidos en tierras pertenecientes a la Iglesia, en virtud de una disposición provisoria que especifica que la tierra será devuelta a sus propietarios, libre de toda carga, desde el momento en que la situación de seguridad lo permita. La Iglesia presiona para que le sean devueltas las tierras y los desplazados se niegan a volver a sus colinas de origen donde residen aquellos que los obligaron a huir. En muchos casos, hubo quienes utilizaron el contexto del conflicto para agredir a sus vecinos y hacerse con sus propiedades.

El Estado, con el fin de obtener tierras suficientes para albergar a los desplazados, se vio obligado también a expropiar a algunos particulares. Es lo ocurrido con el 32% de los campos. Una de las variantes de la expropiación fue la negociación a través del Estado de contratos de compra de parcelas por parte de los desplazados a los propietarios. Aquellos desplazados que no disponían de medios para pagar, podían realizar un trueque de parcelas con el propietario: la antigua

parcela del desplazado por la del propietario. Sin embargo, esto generó desigualdades entre los desplazados de un mismo campo ya que algunos se beneficiaron de una parcela gratuita cedida por el Estado por encontrarse en territorio perteneciente a la comunidad, mientras que otros debieron comprarla a sus propietarios.

El problema de la tierra

La densidad media de población de Burundi (220 habitantes/km², sin tener en cuenta los refugiados en Tanzania) es la más alta del continente africano. En un país donde el 95% de la población vive de la agricultura de subsistencia y donde el Estado obtiene el 65% de sus recursos y la mayor parte de sus divisas del sector primario, la tierra representa el principal recurso económico nacional y es objeto habitual de ambición y conflictos.

La preocupación primordial de refugiados y desplazados es el regreso a sus *itongo* (tierras familiares), mientras que para los ocupantes ilegales de estas tierras esto es el origen de una fuerte inquietud, susceptible de ser manipulada por los contrarios a la transición.⁴

Los exiliados en 1993 han sido los menos perjudicados por las expoliaciones institucionalizadas de tierras, entre otras razones porque la mayoría proceden de las provincias del centro del país, donde los suelos son menos fértiles. Sin embargo, a aquellos que huyeron en 1972, procedentes de las provincias de Bururi y Makamba, se les llama “los sin tierra” o “sin referencia”, ya que gran parte de sus parcelas fueron ilegalmente expropiadas y ocupadas durante más de 30 años.

La tierra ha sido también objeto de una fuerte especulación. Uno de los casos más flagrantes es el de la provincia de Gitega, en el centro del país, donde la iglesia Católica aprovechó su poder adquisitivo para hacerse con numerosas parcelas compradas a los desplazados a precios irrisorios.

En muchas regiones, el resultado del regreso de los refugiados y desplazados ha dependido de la velocidad de su retorno. En Makamba, por ejemplo, incluso cuando aún estaba considerada en fase 4 de inseguridad (la más elevada según el baremo de Naciones Unidas), los desplazados se apresuraban a volver a sus tierras desde el inicio de las negociaciones de paz en 2000, a pesar del inminente peligro, por temor a que la vuelta de los refugiados significara la pérdida de sus territorios. Muchos de los refugiados que están llegando a Burundi actualmente y que ven sus hogares ocupados se convierten en desplazados internos y se instalan en los asentamientos abandonados.

Los principales textos de ley relativos a la tierra, como el código de 1986, han servido para legalizar las sucesivas expoliaciones llevadas a cabo desde 1962. El Estado se concede el derecho de inmiscuirse en la gestión de la propiedad privada, sin hacer siquiera alusión a su utilidad pública o a una justa indemnización.⁵

⁴ Observatoire de l'Action Gouvernementale (OAG), *Analyse sur la politique de rapatriement, de réinsertion et de réhabilitation des sinistrés, ainsi que la problématique de gestion des terres au Burundi*, Bujumbura, marzo de 2003.

⁵ ICG Rapport Afrique, *Réfugiés et déplacés au Burundi: désamorcer la bombe foncière*, Nairobi, 7 de octubre de 2003, N°70.

Los principales textos de ley relativos a la tierra han servido para legalizar las sucesivas expoliaciones llevadas a cabo desde 1962

La subcomisión de la CNRS, creada exclusivamente para la resolución de conflictos ligados a la tierra, a raíz del regreso de los desplazados y refugiados a sus colinas de origen, no se ha puesto aún manos a la obra y está subestimando las consecuencias que puede acarrear.

Politización del regreso

El Gobierno de transición ha fomentado el regreso y reinstalación de los refugiados desde principios de 2002 para debilitar a la rebelión. Los campos de refugiados en Tanzania han sido siempre considerados como las bases de apoyo y la retaguardia de los grupos rebeldes. Con el regreso de los refugiados, controlado por el ejército, el Gobierno pretendía acabar con este apoyo rebelde y forzar a la negociación. Hoy, con un Gobierno mixto, compuesto por miembros del antiguo Ejecutivo y del CNDD-FDD, se sigue llamando al regreso. Ambos grupos esperan impacientes los fondos de ayuda internacional para el programa de “Regreso, reinstalación y reinserción de siniestrados”, del que cada cual espera obtener una parte de estos. Los fondos para la reconstrucción y el desarrollo, gestionados directamente por el Estado y potencial fuente de malversaciones, es otro de los incentivos que empujan al gobierno a llamar al regreso ya que para recibirlos Burundi deberá demostrar estabilidad e, indudablemente, uno de los principales indicadores de estabilidad de un país es el regreso de los refugiados. Los miembros del Gobierno pertenecientes al antiguo CNDD-FDD, de cara a las próximas elecciones legislativas, previstas en principio para finales de este año, están ejerciendo también fuertes presiones para que los refugiados en Tanzania, su electorado potencial, regresen cuanto antes al país.

No obstante, un regreso masivo de los refugiados y desplazados sin haber solucionado antes el problema de la tierra podría generar insatisfacción y ser utilizado políticamente por los combatientes del FNL (grupo rebelde excluido de las negociaciones).

La CNRS

La Comisión Nacional de Rehabilitación de los Siniestrados fue creada con la intención de ser independiente del Gobierno y de trabajar en estrecha colaboración con la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Arusha (CSA) y con los representantes de la comunidad internacional (agencias de Naciones Unidas, agencias internacionales de cooperación y organismos multilaterales).

Sin embargo, desde el comienzo del mandato del Gobierno de transición, la gestión del regreso y reinstalación de refugiados y desplazados ha sido objeto de una fuerte batalla política entre el Gobierno y el CNDD-FDD, que ha llevado a continuas violaciones de los Acuerdos de Arusha.

La puesta en marcha de la CNRS tuvo lugar en marzo de 2003, tras 18 meses de tentativas infructuosas de organización de una repatriación forzada, y la ley que la creó la puso bajo tutela administrativa y financiera del Gobierno, en concreto del

Ministerio de la Reinserción y Reinstalación de Desplazados y Refugiados (MRRDR), lo que de por sí es una violación del Acuerdo de Arusha. Sin embargo, esta tutela respondía a un compromiso político encontrado entre los dirigentes de la transición del Frente para la Democracia de Burundi (FRODEBU) y la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA) para poder disfrutar ambos de los beneficios políticos y financieros ligados a la gestión del regreso y la reinstalación. En ningún caso respondía a los intereses de los refugiados ni de los desplazados.⁶ El Ministerio está regido por la coalición de partidos tutsi del G10, mientras que la presidencia de la CNRS pertenece al partido hutu FRODEBU. El MRRDR posee las mismas prerrogativas que la CNRS y existe un verdadero conflicto de competencias entre ambos organismos.⁷

Esta comisión es además de dudosa eficacia. Hasta octubre de 2003 no elaboró el primer boceto de su plan de acción. Dicho plan fue realizado sin los medios ni el apoyo técnico necesarios. De hecho, presentaba considerables lagunas. En primer lugar, el plan de acción no tenía en cuenta la evolución política burundesa ni los resultados de las negociaciones de alto el fuego. No evocaba la posibilidad de un regreso masivo y espontáneo de los refugiados ni elaboraba un calendario para hacer frente a tal eventualidad. En segundo lugar, no realizaba un balance crítico de las políticas ya puestas en marcha o de las iniciativas lanzadas para hacer frente al problema de los desplazados internos. El plan de acción no presentaba ninguna estrategia operacional (apoyada por una evaluación cifrada de las necesidades técnicas y financieras de la CNRS) ni calendario ni prioridades. Tras numerosas críticas y gracias a una fuerte presión internacional, la CNRS creó un nuevo plan de acción en enero de 2004 que se centra en la reconstrucción de viviendas.

Los actores de la reconstrucción

El “mercado” del regreso, reinstalación y reinserción de los siniestrados interesa a numerosos actores: desde el Gobierno hasta las ONG, que pueden justificar así su presencia frente a los financiadores. Sin embargo, muchas de éstas trabajan en el terreno sin que nadie sepa quién hace qué y durante cuánto tiempo.

El carácter urgente de ciertas actividades ha empujado a los donantes a financiar las asociaciones, ONG y agencias denominadas “de emergencia” para llevar a cabo, sin embargo, tareas más propias de programas de desarrollo. Las ONG de ayuda humanitaria se han visto en numerosas ocasiones frente al reto de llevar a cabo programas de desarrollo en plazos más propios de la emergencia, lo cual ha provocado numerosos problemas de apropiación de los proyectos por parte de los beneficiarios y, por consiguiente, el fracaso de dichos proyectos.

⁶ ICG Briefing Afrique, *Réugiés et Déplacés burundais: Construire d'Urgence un Consensus sur le Rapatriement et la Réinstallation*, 2 de diciembre de 2003.

⁷ *Ibidem*.

Recomendaciones

El éxito de los acuerdos de paz y la estabilidad socioeconómica de Burundi dependen en gran medida de cómo se lleve a cabo el proceso de repatriación, reinstalación y reinserción de los refugiados y desplazados internos.

El regreso de los refugiados y los desplazados a sus lugares de origen debe ser fruto de un acto voluntario y no de la manipulación por intereses partidistas y financieros del Gobierno de transición.

El grupo rebelde FNL no puede seguir siendo excluido de los acuerdos de paz. Mientras siga existiendo un grupo armado, por pequeño que sea, no podrá haber estabilidad en el país. Los grupos más vulnerables o los insatisfechos del proceso de reinstalación pueden encontrar en la lucha armada la única solución al problema de la supervivencia y al FNL no le costaría aliarlos a su causa.

La CNRS deberá proponer cuanto antes soluciones eficaces al problema de la propiedad privada de los refugiados y desplazados, ofreciendo sistemas de restitución o indemnización a aquellos que hayan sido expropiados ilegalmente durante su exilio.

Los culpables deben ser llamados ante la justicia. Para calmar las conciencias y el odio, sería necesaria la creación de una Comisión de la Verdad que reconstruyera la memoria colectiva y ayudara a las víctimas a poder cerrar las heridas. La amnistía de los genocidas sólo generaría aún más rencores entre la población y sería caldo de cultivo de nuevos levantamientos armados y ajustes de cuentas. Es necesario llevar a cabo una fuerte sensibilización hacia la convivencia y una educación para la paz desde las escuelas.

Los programas de rehabilitación, reinstalación y reinserción deberán considerar al conjunto de las víctimas por igual, ya sean refugiados, desplazados, población de acogida o indigentes. Es inaceptable volcarse en la reinstalación de los refugiados mientras que la población local, que ha resistido a todos estos años de conflicto y que en muchas comunidades vive en condiciones de extrema pobreza, quede al margen de las ayudas.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de velar por que sean respetados los principios del Acuerdo de Arusha y que las acciones humanitarias sean coherentes y debidamente coordinadas.